

## Reportaje especial: Transición justa

LOS SINDICATOS  
KENIANOS SE  
ADELANTAN A  
LA EMERGENCIA  
CLIMÁTICA

2

COSTA RICA:  
MÁS ALLÁ DE SU  
APLAUDIDO MODELO  
MEDIOAMBIENTAL

8

DESAÍOS A LA  
IMPLEMENTACIÓN  
DE LA TRANSICIÓN  
JUSTA EN FILIPINAS

13

TARANAKI 2050:  
¿UNA HOJA DE  
RUTA PARA NUEVA  
ZELANDA Y EL  
MUNDO?

18

EL RETO DE LA  
TRANSICIÓN  
ENERGÉTICA EN  
SERBIA

23

LOS SINDICATOS DE  
EEUU MUESTRAN  
EL CAMINO HACIA  
UNA ECONOMÍA  
DESCARBONIZADA

29



**TRANSICIÓN  
JUSTA: DE  
LA TOMA DE  
CONCIENCIA A LA  
ACCIÓN CONJUNTA**

“

La lucha por la justicia climática ya no tiene que ver solo con el medio ambiente: nuestras vidas también están en juego.

”

# LOS SINDICATOS KENIANOS ABORDAN SIN TITUBEOS LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA

## POR MAINA WARURU



© AFP/Tony Karumba

Un grupo de lugareños cruza aguas que retroceden en una zona de inundaciones repentinas en Solai, Subukia (condado de Nakuru) el 10 de mayo de 2018. Las inundaciones han aumentado en los últimos cuatro años en el valle del Rift de Kenia. En 2020, más de 5.000 personas fueron desplazadas tan solo en la zona del lago Baringo.

*“Al crear defensores de la ecología, nuestro objetivo es lograr expertos medioambientales a nivel sindical y crear capacidad para participar y defender una transición justa en Kenia”.*

Después de 18 meses de confinamientos, cierre de fronteras, vuelos que no han despegado y restricciones a los viajes, la industria mundial del turismo sigue tambaleándose como consecuencia de la covid-19. Uno de los países más devastados ha sido Kenia. Antes de la pandemia, su sector turístico representaba el 4,4% de su PIB y cada año recibía a más de dos millones de visitantes. Sin

embargo, en 2020 se observó **una reducción del 72% en la llegada de turistas** al país africano, lo que se tradujo en unas pérdidas de aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Pero, incluso antes de la pandemia, el sector del turismo de Kenia trataba de capear otro temporal: el cambio climático. Durante los últimos años, la sindicalista Susan Wanjiru ha observado conmovida cómo numerosos afiliados al Sindicato keniano de traba-

jadores del hogar, hoteles, instituciones educativas, hospitales y sectores afines (KUDHEIHA, por sus siglas en inglés) han perdido sus puestos de trabajo a causa del cierre de hoteles cercanos al lago en el Gran Valle del Rift, uno de los principales atractivos turísticos de Kenia.

Los cierres registrados durante los últimos cuatro años son consecuencia del aumento de los niveles del agua en los lagos, en particular en la zona de los lagos Baringo y Naivasha, causado por lluvias inusualmente fuertes, cambios en el uso de las tierras y la pérdida de humedales. En la zona del lago Baringo, las inundaciones desplazaron a **más de 5.000 personas en 2020**.

“Cuando hay inundaciones vemos cómo los hoteles, las viviendas y las carreteras quedan sumergidas. Algunos de los hoteleros no consiguen recuperarse de la inundación y se ven obligados a cerrar su empresa. Esto significa que los trabajadores pierden su trabajo”, dice Wanjiru, secretaria de la sección del KUDHEIHA en Nakuru, la cuarta ciudad más grande de Kenia, situada en el valle del Gran Valle del Rift.

“En los dos últimos años se han realizado diferentes formaciones y acciones en el lugar de trabajo para ayudar tanto a los trabajadores como a los empleadores a aprender a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y aumentar la concienciación ambiental.”

Y lejos de los lagos, en la famosa reserva natural de Masai Mara, también se puede observar el impacto del cambio climático, con lluvias erráticas y largos periodos de sequía que contribuyen a la disminución de las poblaciones silvestres. “Los puestos de trabajo corren peligro en Mara; los volúmenes de agua del río Mara han disminuido debido a la degradación del **depósito de agua de Mau**. La migración de ñus se ha visto muy afectada, lo que ha dado lugar a un nivel bajo de turismo. Esto ha afectado mucho a numerosos trabajadores y sus medios de vida”, señala Wanjiru.

La situación no solo ha reducido el número de afiliados de su sindicato (según Wanjiru, de 2.000 afiliados al KUDHEIHA en la zona del Valle del Rift, al menos 77 han perdido su trabajo en los dos últimos años), sino que también ha dejado a los antiguos trabajadores de la hostelería sin ingresos, lo cual pone en gran peligro a sus familias y comunidades.

## — ALIANZAS, DIVULGACIÓN Y MEDIDAS

Motivada por el deseo de educar a sus colegas y sus comunidades acerca de las consecuencias del cambio climático y las medidas que pueden adoptarse para prevenir, mitigar o adaptarse a los peores efectos, hace dos años Wanjiru fue designada “defensora de la ecología” en el KUDHEIHA. “Kenia depende en gran medida de recursos naturales en los que incide el clima –como los bosques, la costa, los lagos y las especies silvestres tanto marinas como terrestres– para los medios de subsistencia de millones de personas. Nos encontramos en una situación de gran vulnerabilidad a causa del cambio climático”, advierte.

Su función de responsable de sensibilización sobre el cambio climático incluye la tarea de integrar la transición justa y la estrategia sobre la política climática en todo el movimiento sindical de Kenia. Los sindicatos kenianos llevan trabajando en estas iniciativas desde 2016, incluido a través de una antigua alianza de colaboración con el Organismo danés de desarrollo internacional. La labor de los sindicatos recibió un impulso enorme en 2019, cuando la central sindical nacional de Kenia, la Organización Central de Sindicatos de Kenia (COTU-K, por sus siglas en inglés), formó una alianza con la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) para aumentar la comprensión y la capacidad de los sindicatos en cuanto a cuestiones climáticas. A nivel sectorial, el KUDHEIHA ha llevado a cabo una labor similar con la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).

En los dos últimos años se han realizado diferentes formaciones y acciones en el lugar de trabajo para ayudar tanto a los trabajadores como a los empleadores a aprender a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y aumentar la concienciación ambiental. Las iniciativas han incluido asociarse con gerentes de hoteles en el Gran Valle del Rift para plantar árboles, participar en



© AFP/Tony Karumba

Entre un 85 y un 90% del suministro de electricidad de Kenia procede de fuentes energía renovable, como la que produce la planta hidroeléctrica de Masinga, a unos 230 kilómetros al norte de Nairobi. Esto convierte a Kenia en líder de energías limpias de África oriental.

la limpieza de playas, sensibilizar a los turistas sobre la conservación del agua y de la energía y la prohibición de las bolsas de plástico en los parques naturales.

“Todos nosotros hemos sufrido en algún momento los efectos del cambio climático.”

Robert Muthami, coordinador de programas en FES Kenia, dice que su organización ha colaborado con trabajadores afiliados al COTU-K de sectores como la energía, la salud, la hostelería, el turismo y la manufactura para apoyar los esfuerzos hacia la transición energética, así como trabajar en políticas. “Hemos ayudado a sindicatos de trabajadores a redactar un marco de transición justa para Kenia que proporciona directrices para llevar a cabo negociaciones eficaces sin lagunas. La voz de los trabajadores no ha estado presente en el pasado”, cuenta a *Equal Times*.

Los sindicatos también han estado ejerciendo presión sobre los dirigentes empresariales en el sector de la hostelería para que inviertan en infraestructuras ecológicas, como la energía renova-

ble. Esto ya ha arrojado resultados positivos: “Durante diferentes visitas a los parques nacionales hemos colaborado con los gerentes de los distintos establecimientos turísticos”, dice Canjuro. “Gracias a nuestra sensibilización, la mayoría de los hoteles que representamos han instalado paneles solares para sus necesidades energéticas. Algunos han modernizado sus sistemas energéticos para que los aires acondicionados y las luces se apaguen automáticamente cuando el huésped se va de la habitación”.

Con el apoyo del COTU-K y FES, el KUDHEIHA también ha estado trabajando para incluir una cláusula sobre el cambio climático en el convenio colectivo del sector de hostelería, **que actualmente se está examinando**. Wanjiru señala que esto generará una mayor “responsabilización y compromiso” con las cuestiones climáticas tanto entre los trabajadores como los empleadores.



© AFP/Simon Maina

Pasajeros en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi se dirigen a su puerta de embarque en agosto de 2020 después de que la aerolínea Kenya Airways retomara sus vuelos hacia Reino Unido tras un periodo de suspensión debido a la pandemia de coronavirus.

Muthami, de FES, señala que ha habido algunas dificultades iniciales en los intentos por integrar la acción contra el cambio climático en el movimiento sindical de Kenia: “No ha resultado fácil crear un grupo dentro del movimiento para defender el concepto de la transición justa. Y los sindicatos aún tienen que esforzarse más por crear alianzas con otros actores como la sociedad civil”, advierte.

“Los trabajadores pueden ayudar a influir en las políticas nacionales para mejorar el trabajo decente y asegurar un entorno de trabajo sostenible para los trabajadores en las economías formales e informales, así como para el bien de la sociedad en su conjunto.”

Sin embargo, a nivel de los trabajadores, Wanjiru, que es una de los aproximadamente 20 defensores de la ecología en el movimiento sindical de Kenia, dice que ha experimentado una respuesta sumamente positiva a estas iniciativas de divulgación.

“Todos nosotros hemos sufrido en algún momento los efectos del cambio climático”, explica.

## == CREAR UN EJÉRCITO DE EXPERTOS MEDIOAMBIENTALES EN EL ÁMBITO DE LOS SINDICATOS

Como afiliada del COTU-K, el KUDHEIHA también ha formado parte del grupo fundamental que está presionando para enmendar la [Ley sobre el cambio climático de Kenia 2016](#) a fin de incluir el COTU-K en el Consejo Nacional sobre el Cambio Climático.

“Los trabajadores pueden ayudar a influir en las políticas nacionales para mejorar el trabajo decente y asegurar un entorno de trabajo sostenible para los trabajadores en las economías formales e informales, así como para el bien de la sociedad en su con-

junto”, apunta Rebecca Okello, una asesora en políticas climáticas en el COTU-K.

Hasta ahora se ha excluido a los sindicatos del consejo, lo cual no solo excluye a los trabajadores de la formulación de políticas, sino que también incide en la aplicación de estrategias climáticas. Sin embargo, aunque los sindicatos hayan estado pidiendo un mayor diálogo social con el Gobierno, las iniciativas para crear un “movimiento verde” dentro de las afiliadas del COTU-K han sido fructíferas: actualmente hay dos representantes ecologistas formados en cada sindicato afiliado.

“El objetivo es lograr expertos medioambientales a nivel sindical y crear capacidad para participar y defender una transición justa en Kenia. También esperamos mejorar la comprensión de la relación entre las políticas de protección ambiental y las condiciones laborales”, cuenta Okello a *Equal Times*.

Con la formación organizada con el apoyo de FES, otro objetivo es asegurar que los sindicalistas en todos los niveles puedan incluir cuestiones climáticas en todas las negociaciones en las que participen, ampliando así el enfoque tradicional en el salario y las condiciones laborales.

“Confiamos en que estamos construyendo un ejército de sindicalistas que conocen en profundidad las maneras modernas de organizar a los trabajadores en torno a cuestiones emergentes y que tienen la capacidad de negociar convenios colectivos completos con empleadores y autoridades”, dice Okello. Señala que está teniendo resultados positivos para las afiliadas al COTU-K, como el KUDHEIHA y el Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico y Afines de Kenia (KETAWU).

“Ya estamos observando una gran mejora de la capacidad de los dirigentes sindicales para involucrarse en actividades más amplias y cuestiones climáticas. Además de promover una transición justa y ecológica para el desarrollo sostenible, también están mejor preparados para ofrecer un análisis de legislación nacional, como los compromisos determinados nacionalmente de Kenia y la puesta en marcha de las respuestas sindica-



© BSIIP via AFP

*Ñus al atardecer en la reserva de Maasai Mara, donde las lluvias irregulares y los prolongados periodos de sequía (ligados del cambio climático), contribuyen al declive de la fauna salvaje. Esto, a su vez, provoca una reducción del número de turistas, lo que impacta de lleno en los empleos y medios de vida.*

les”, observa la responsable sindical. Sin embargo, todavía queda trabajo por delante antes de que este incremento de los conocimientos sindicales tenga un impacto verdadero en las políticas nacionales: en la actualización más reciente de los compromisos determinados nacionalmente de Kenia (de diciembre de 2020) la transición justa solo se menciona de pasada.

## ■ KENIA: UNA DEFENSORA REGIONAL DE LAS RENOVABLES

Aun así, hay mucho que celebrar en Kenia. Entre el 85% y el 90% del suministro eléctrico del país procede de fuentes renovables (principalmente hidroeléctricas y geotermales), lo que lo convierten en el líder regional en energía limpia de África oriental. Ernest Nadome es el vicesecretario general del COTU-K y el secretario general del KETAWU, un sindicato muy prominente en el sector energético de Kenia. Dice que es fundamental que los sindicatos se aseguren de que los trabajadores cuentan con las competencias adecuadas para participar realmente en una transición justa.

Y señala que el KETAWU trabaja duro por incrementar y reciclar las competencias de los trabajadores “para que el cambio no les pille con la guardia bajada”. Nadome también apunta que en agosto el productor energético de Kenia, Kenya Electricity Generating Company (KenGen), se convirtió en la primera empresa de África en obtener más de 3,8 millones de dólares en créditos de carbono del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por diferentes proyectos de energía limpia, gracias en

parte –insiste Nadome– al personal adecuadamente calificado de la empresa.

Los trabajadores del sector energético se han asegurado de que las centrales hidroeléctricas están libres de sedimentos y se han ofrecido como voluntarios para plantar árboles en zonas de captación de agua en un intento por frenar la erosión del suelo (lo que da lugar a sedimentos dentro de las presas, y, por ende reduce su capacidad de generar electricidad). Nadome describe un acuerdo alcanzado con la Autoridad de formación industrial nacional para introducir un curso de formación para los técnicos en energía solar como “la mayor victoria del sindicato hasta la fecha”, ya que esto ayudará a formar a los trabajadores para uno de los ámbitos de mayor crecimiento de la economía verde.

“Nuestro sindicato, el KETAWU, es el sindicato más involucrado en el sector energético. Somos los que hemos impulsado el impresionante cambio de Kenia hacia la energía limpia. Nuestra participación en iniciativas climáticas ha garantizado que, aunque el Gobierno haya congelado el empleo [debido a los confinamientos a causa del coronavirus] ninguno de nuestros miembros ha sido mandado a casa”, añade.

# COSTA RICA, UN CONOCIDO Y APLAUDIDO MODELO MEDIOAMBIENTAL FRENTE A GRANDES DESAFÍOS (NO TAN CONOCIDOS)

## POR FABRICE LE LOUS



© Fabrice Le Lou

*Planta hidroeléctrica Cachí, en la provincia de Cartago, Costa Rica. Esta central provee energía eléctrica a más de 190.000 hogares en el país centroamericano. Hace parte de la matriz eléctrica compuesta únicamente de energías renovables.*

*Aunque Costa Rica acumula aplausos por sus políticas medioambientales, en algunos rubros igualmente ligados al medio ambiente, como la transición justa, está rezagado.*

En el ocaso de 2021, Costa Rica está coleccionando vótores internacionales en materia de medio ambiente. El pasado 17 de octubre, el país centroamericano recibió [el premio Earthshot](#) en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza por su programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA).

Este programa ha beneficiado a unas 19.000 familias desde su creación, ha movilizado 524 millones de dólares USD (unos 450 millones de euros) en proyectos de conservación en más de 1,3 millones de hectáreas, y ha contribuido a que la cobertura forestal

del país pasara de 47% a comienzos del año 2000, al 59% actual.

El 13 de octubre, la banda inglesa Coldplay anunció que vendrá a Costa Rica a dar conciertos precisamente por razones medioambientales: por ser un “modelo” para el mundo en leyes que favorecen la salud del planeta. Y sobre todo por tener una matriz eléctrica nacional del 100% de energías renovables. Este último dato, el hecho de que toda la energía eléctrica que produce Costa Rica de forma primaria proviene de fuentes renovables, es una de las características costarricenses que más se conocen en el mundo.

El *Washington Post* dedicó recientemente [un perfil a Andrea Meza](#), ministra de Ambiente de Costa Rica, para celebrar que una nación tan pequeña –poco más de 52.000 kilómetros cuadrados de superficie– sea un ejemplo para el mundo en materia de medio ambiente: “un pequeño país en desarrollo como el de Meza puede superar desafíos y reconstruir su economía de una forma que protege al clima. Si Costa Rica puede hacerlo, ¿qué es lo que detiene a países mucho más grandes y ricos a seguir el ejemplo?”, resaltaba la cabecera norteamericana.

Sin embargo, cuando se usan las palabras “materia de medio ambiente”, no podemos quedarnos únicamente en los temas de protección de bosques y matriz eléctrica. Si bien son capítulos que Costa Rica domina desde hace décadas, hay aristas menos conocidas –pero igualmente ligadas a la salud del planeta–, donde Costa Rica está rezagada. Una de ellas es la [transición justa laboral](#), en medio de proyectos que, en 2021, con una pandemia atravesada, lucen demasiado ambiciosos.

“En el Plan de Descarbonización, el sector energético asociado con la movilidad de personas y el transporte de mercancías es el reto más importante: movilidad eléctrica y transporte público son los dos más grandes desafíos para una transformación de la matriz energética y una transición justa.”

## ¿CÓMO HIZO COSTA RICA PARA TRANSFORMAR SU MATRIZ ELÉCTRICA?

La matriz de energía eléctrica en Costa Rica se compone completamente de energías renovables. Sobre todo de centrales hidroeléctricas, pero también cuenta con una importante participación de energía geotérmica y de biomasa, más la integración reciente de energías eólica, solar y de biogás.

Cinco plantas hidroeléctricas generan aproximadamente el 33% de la matriz eléctrica. Estas plantas son: Reventazón, Angostura, Arenal, Miguel Dengo y Cachí. Nada de esto es nuevo. Las primeras hidroeléctricas comenzaron a construirse en los años 50, a través del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Lawrence Pratt, exdirector del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), y profesor de desarrollo sostenible y estrategia empresarial ambiental en el INCAE Business School en Costa Rica, comenta para *Equal Times* que esto ha sido buena visión de tomadores de decisiones en tiempos pasados.

“Fue en los años 50 cuando Costa Rica decidió que ni tenía ni iba a tener suficientes divisas para seguir comprando e importando petróleo para la generación de energía eléctrica. Al tener tantas cordilleras y tantos ríos caudalosos, lo hidrológico era una opción lógica. Y después entró la geotermia. Era una buena opción para Costa Rica. Los golpes de precios de petróleo de 1973, 1979, 2007, etc., fueron menos fuertes. (...) Ahora, con las preocupaciones del cambio climático, Costa Rica parece visionario”, señala Pratt.

A lo largo de esos años de apertura de plantas hidroeléctricas, según Marco Vinicio Zamora, coordinador del Proyecto de Transformación Social Ecológica para Centroamérica de la Fundación Friedrich Ebert (FES), los trabajadores del ICE se aseguraron una paulatina transición justa laboral, sobre todo a través de un frente de sindicatos que son los que representan a los miles de trabajadores del ICE.

Actualmente, de hecho, el ICE no tiene solamente un sindicato, sino un amplio frente sindical con uniones que velan por sectores específicos, como uniones de obreros, uniones de ingenieros, etc.

“El desarrollo del ICE como institución y como empresa responsable de los planes de generación eléctrica sí han contado con una fuerte organización sindical y defensa de los derechos laborales en el sector público, pero hay que tomar en consideración las condiciones distintas en la fuerza laboral del sector privado, que [también] participa en la generación eléctrica y que experimenta una fuerte tradición antisindical y aprovecha de formas de tercerización en su esquema de contratación, principalmente en la construcción”, recalca Zamora.

En Costa Rica, en 2021, la tradición sindicalista responde casi exclusivamente al sector público; un 15% de la fuerza laboral nacional. El sector privado –85% de los trabajadores– prácticamente no tiene sindicatos. Esto es un reto para una transición justa de cara al futuro, precisamente por la tendencia de tercerizar servicios.

También hay que tomar en cuenta que, si bien la matriz eléctrica de energía de Costa Rica proviene de fuentes renovables, no toda la energía que consume el país proviene de la corriente eléctrica. De hecho, la mayor parte atañe al transporte terrestre. Y aquí los combustibles fósiles importados siguen siendo el rey.

De acuerdo con el estudio [Análisis Matriz Energética de Costa Rica - Renovabilidad de las fuentes y reversibilidad de los usos de energía](#), realizado por la FES en 2016, la principal fuente de energía en Costa Rica en 2015, considerando la oferta primaria interna y la importación, fueron los derivados del petróleo: “La oferta primaria interna en Costa Rica se caracteriza por ser extraída de fuentes renovables, pero la oferta secundaria de energía proviene en más del 70% de fuentes no renovables, principalmente derivados del petróleo, obtenidos mediante su importación”, cita el estudio.

Estos son datos que no pululan en titulares de medios foráneos cuando se menciona al país centroamericano. Pero en ellos des-cansa uno de los mayores retos de Costa Rica de cara al futuro.

## UN AMBICIOSO PLAN PARA EL FUTURO: ‘DESCARBONIZAR’ EL PAÍS

Costa Rica lanzó en 2018 un plan para ‘descarbonizar’ su economía, en el cual [promete una transición justa](#) en materia social. Por ahora, todo está sobre el papel, pero no hay acercamientos con las uniones de trabajadores públicos. Y el hecho de que prácticamente no existen uniones en el sector privado puede mermar esa transición. Que de todas formas luce complicada de lograr en poco más de tres décadas, pues el objetivo es [lograr cambios macro de aquí al 2050, como](#) reemplazar el actual parque automovilístico público y privado por uno eléctrico; desarrollar mejores políticas energéticas y mejorar la sostenibilidad ambiental del sector agroalimentario.

“En el Plan de Descarbonización, el sector energético asociado con la movilidad de perso-



© AFP/Ezequiel Becerra

El gobierno de Costa Rica anunció el 5 de marzo de 2020 un plan piloto que prevé un transporte público descarbonizado, comenzando por una flota de autobuses eléctricos.



© Fabrice Le Lous

*Una finca en las montañas de la provincia de Alajuela, en Costa Rica. El país centroamericano tiene una geografía propicia para aprovechar energías renovables. También para atraer turismo y ecoturismo.*

nas y el transporte de mercancías es el reto más importante: movilidad eléctrica y transporte público son los dos más grandes desafíos para una transformación de la matriz energética y una transición justa”, apunta Marco Vinicio Zamora, de la FES Costa Rica.

“Como ejemplo, Costa Rica es importante. La electricidad de fuentes renovables es solo un aspecto interesante y esto se combina con tener 35% de su territorio bajo protección, su reputación para el ecoturismo, el moratorio con petróleo y minería.”

En el pasado reciente, los empresarios que manejan el sector del transporte público han mostrado reticencia en adoptar cambios básicos, como el cobro electrónico, lo cual regularía mejor los precios de los pasajes. También han criticado el proyecto gubernamental de un tren eléctrico de alta velocidad, que busca sumarse a la oferta de movilidad en masa en las cuatro ciudades más grandes del país, entrelazándose con el mapa de rutas de buses

(mapa que no se rediseña desde hace décadas y que está obsoleto).

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los principios fundamentales de la transición justa engloban tanto la maximización de la creación de empleo decente y empresas sostenibles como minimizar la destrucción de empleos, acompañar el cambio de trabajadores que pierden empleo y comunidades perjudiciales, y promover la generación de empleos verdes.

Esto debe ir acompañado de diálogos con sectores sindicales. Pero aunque en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) de los planes gubernamentales ticos se habla de transición justa, las negociaciones con sectores sindicales brillan por su ausencia.

Fanny Sequeira Mata, secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum

Novarum Costa Rica (CTRN), afiliada a tres confederaciones sindicales internacionales, dice lo siguiente a *Equal Times*: “Hasta la fecha, la CTRN no ha sido invitada a participar en ninguna iniciativa gubernamental para la transición justa. No existe ningún espacio de diálogo social donde consultar, abordar y promover políticas públicas concertadas para desarrollar este tema trascendente. Es importante destacar que la CTRN siempre ha mantenido su vocación de diálogo social y así lo ha manifestado permanentemente, pero lamentablemente este Gobierno se ha caracterizado precisamente por la ausencia de este diálogo”.

“El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada es de naturaleza antisindical. Para nada se ha acercado a ANEP. Particularmente, con nuestra organización la confrontación ha sido constante. Una de las razones es que Alvarado responde a los intereses del mega-empresariado de este país y se ha adherido a los nefastos postulados neoliberales en materia de política económica”, estima Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

*Equal Times* buscó la versión oficial a través del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pero hasta varias semanas después de realizadas las consultas por los canales oficiales, no se habían obtenido respuestas.

Lo cierto es que la pandemia no ha ayudado a agilizar el Plan de Descarbonización. Pero la inacción o lentitud en sus primeras etapas contrasta fuertemente con los vótores que el país recibe por políticas de gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Plan preveía que para 2022 hubiese buses 100% eléctricos ofreciendo el servicio en la Gran Área Metropolitana, pero en la realidad únicamente se recibieron tres unidades en diciembre de 2020, que se pusieron en marcha recién a comienzos de agosto de 2021.

“Costa Rica cuenta con instrumentos nacionales de política como el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (PNE), el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030, el Plan de Descarbonización 2018-2050, el compromiso internacional de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París, pero su cultura de implementación no es tan clara. Por ejemplo, los sindicatos del sector público no tienen el tema en sus agendas”, agrega Zamora, de la FES.

¿Puede realmente un país tan pequeño como Costa Rica influenciar y provocar cambios en países mucho más grandes y ricos? A esa interrogante responde el especialista Lawrence Pratt:

“Como ejemplo, Costa Rica es importante. La electricidad de fuentes renovables es solo un aspecto interesante [y esto se combina con] tener 35% de su territorio bajo protección, su reputación para el ecoturismo, el moratorio con petróleo y minería (...). Pero muchos factores confluyen. [Por ejemplo], el país ha decidi-



© AFP/Ezequiel Becerra

*Movilidad de personas y transporte público eléctricos son los dos mayores desafíos para una transformación de la matriz energética y una transición justa.*

do en reiteradas ocasiones que no puede ser muy extractivo por ser pequeño; que no es apto para industria pesada porque no tiene ni la energía barata ni la infraestructura. Al entender estos puntos, un sector industrial basado en servicios, tecnología y artículos livianos fomentó la industria turística, de dispositivos médicos y otros productos de alto valor y bajo consumo energético. Todo es un conjunto: parte historia, parte suerte, parte buenas decisiones”.

Pratt enumera justamente los puntos fuertes de la economía tica: su capacidad de hospedar y ofrecer servicios para turismo y ecoturismo; su producción nacional de equipos médicos de alta tecnología y de productos farmacéuticos para importación; su producción de algunos productos comestibles de alta demanda internacional, como café, banano o carne bovina. Y una poderosa construcción de imagen de país verde.

Queda ver si esa tríada, la de “historia, suerte y buenas decisiones” vuelve a conformarse ahora que la pandemia languidece y el horizonte vuelve a despejarse. El país la necesitará para que el Plan de Descarbonización y el rol de paradigma medioambiental vayan por buen camino.

# SI FILIPINAS TIENE EL MARCO JURÍDICO, ¿QUÉ MÁS NECESITA PARA IMPULSAR UNA AUTÉNTICA TRANSICIÓN JUSTA?

POR ESTRELLA TORRES



© Nonie Reyes

En esta foto de septiembre de 2021, Rogelio Oliva posa junto a su 'jeepney' de diésel, un vehículo que conduce desde hace veinte años por la ruta Baclaran-Nichols, en el área metropolitana de Manila. Oliva se resiste a cambiar a un 'jeepney' eléctrico, como exige el gobierno, por el mayor coste de mantenimiento que le supondría.

*¿Hasta qué punto es compatible la apuesta gubernamental por un crecimiento económico vertiginoso con la ambiciosa promesa de transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono?*

En 2008, Filipinas aprobó la histórica **Ley de Energías Renovables (ER)** con el objetivo de reducir las emisiones de carbono del país y aprovechar sus fuentes de energía locales. La ley se diseñó para atraer a los inversores privados mediante incentivos fiscales, a fin de que exploraran las abundantes fuentes de energía naturales de Filipinas, sobre todo hidrotermales, solares, eólicas, de biomasa y oceánicas.

Sin embargo, Filipinas continúa hoy apostando fuerte por el carbón. En la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow (Escocia), Filipinas se ha comprometido a **reducir un 30% de aquí a 2040** los gases nocivos de efecto invernadero. Pero este nuevo objetivo que se ha marcado el país asiático en su plan de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) supone un retroceso respecto a la promesa original del gobierno de reducir las emisiones en un 70% para 2030.

El carbón representa casi la mitad de la matriz energética de Filipinas y se prevé que alcanzará el 59,1% en 2028, a pesar de que el gobierno decretó en octubre de 2020 una moratoria en la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón. En el país hay, además, 28 centrales eléctricas de carbón a pleno rendimiento y el Ministerio de Energía aprobó otras 22, en el marco de su Plan Energético de Filipinas (PEP) 2018-2040, que pretende impulsar la visión del presidente Rodrigo Duterte de transformar Filipinas en una “una sociedad próspera y predominantemente de clase media para el año 2040”, mediante el aumento de la producción de fuentes limpias de energía local, la disminución del despilfarrero energético y garantizando “el equilibrio entre el suministro de servicios energéticos fiables a un precio razonable, el apoyo al crecimiento económico y la protección del medio ambiente”.

“Aún tenemos una oportunidad viable de encarrilar nuestros compromisos, pero el Ministerio de Energía debe apuntar más alto en materia de energías renovables en su plan energético para 2018-2040 y animar a las eléctricas a abandonar el carbón.”

renovables] carece de un proceso de diálogo social o de consulta con los trabajadores y las comunidades, por lo que no prevé una transición justa en la estrategia hacia las energías renovables”.

Para Unay, el proceso de descarbonización debe contar con la participación de todos –desde los trabajadores de las industrias contaminantes hasta los consumidores, pasando por las comunidades y los gobiernos locales– con objeto de evitar los perjuicios que esta pueda infligir a las personas y al medio ambiente. Sin una participación significativa de los trabajadores, el gobierno no podrá alcanzar las metas climáticas a las que se ha comprometido, afirma. “Los trabajadores deben comprender la ciencia del cambio climático para así poder participar activamente en la transición justa”.

## CUANDO LA TRANSICIÓN ES INJUSTA: EL CASO DE LOS JEEPNEYS

Quienes defienden un aumento del uso del carbón arguyen que será imposible lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden sin los combustibles fósiles. Sin embargo, los defensores del clima temen que el mencionado PEP sea incongruente con los compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París. ¿Cómo ha pasado Filipinas de ser uno de los primeros paladines de las energías renovables a tener una política energética a largo plazo que la aleja de su prometidora trayectoria “verde”?

“Los intereses creados por el carbón en el país, los erráticos cambios de política y los obstáculos políticos dificultan la transición hacia una senda baja en emisiones de carbono. Aún tenemos una oportunidad viable de encarrilar nuestros compromisos, pero el Ministerio de Energía debe apuntar más alto en materia de energías renovables en su plan energético para 2018-2040 y animar a las eléctricas a abandonar el carbón”, apunta Khevin Yu, activista de Greenpeace Filipinas.

Para Vicente Posada Unay Jr., secretario general del sindicato filipino del sector eléctrico National Union of Workers in the Power Industry (Power), afiliado a la central sindical nacional Sentro, parte del problema radica en que el gobierno no se ha comprometido adecuadamente con las partes interesadas fuera de los círculos políticos y la comunidad empresarial: “La ley [de energías

Una de las medidas introducidas para alcanzar las metas climáticas a las que se ha comprometido el país y, al mismo tiempo, proporcionar a los viajeros filipinos un transporte más seguro, más limpio, más saludable y con un combustible más eficiente ha sido la eliminación gradual de los *jeepneys*, un modo popular de transporte público desde la ocupación estadounidense en la década de 1900. En 2017, el gobierno introdujo el Programa de Modernización de Vehículos de Utilidad Pública, con la intención de avanzar hacia la sustentabilidad del sector mediante la sustitución por vehículos eléctricos de todos los *jeepneys* con motor diésel de más de 15 años.

Las medidas afectan a unos 200.000 conductores, muchos de los cuales consideran inasumibles los costes que conlleva el plan de modernización, tildado de “antipobres”. Joshua Mata, secretario general de Sentro, precisa que los trabajadores no se oponen al cambio hacia las energías limpias, pero que “los trabajadores afectados, como los

conductores, deben recibir apoyo estatal, a través de subvenciones o préstamos fáciles”, algo que el plan de 2017 no contempla. La confederación sindicatos del transporte afiliada a Sentro, la National Confederation of Transport Workers’ Union (NCTU), intentó apelar la decisión, pero el gobierno se negó a negociar. En respuesta, los miembros de NCTU convocaron una serie de huelgas y protestas a partir de octubre de 2017 que paralizaron el transporte de las principales ciudades del país.

“El proceso de descarbonización debe contar con la participación de todos –desde los trabajadores de las industrias contaminantes hasta los consumidores, pasando por las comunidades y los gobiernos locales–. Los trabajadores deben comprender la ciencia del cambio climático para así poder participar activamente en la transición justa.”

Tras las movilizaciones, Sentro ayudó a la NCTU a formar cooperativas de transporte, que negociaron préstamos blandos por valor de 160.000 pesos filipinos PHP (aproximadamente 3.200 dólares USD) por persona, para ayudar a los conductores de *jeepney* a cambiar a los vehículos eléctricos. Sin embargo, esta transición está plagada de problemas. Los conductores y las cooperativas de transporte se quejan de la ausencia de un entorno propicio (faltan estaciones de carga y talleres que reparen los *e-jeepneys*, etc.) además del elevado coste de los *jeepneys* eléctricos (entre 800.000 y 1.200.000 pesos PHP; el equivalente a entre 15.700 y 23.600 dólares). Los conductores también tienen que asumir gastos adicionales, como los de mantenimiento y las costosas sustituciones de las baterías.

Por si esto fuera poco, después de más de 18 meses de confinamiento en Filipinas (este país ordenó uno de los confinamientos más estrictos del mundo para



Conductores de ‘jeepney’ protestan en febrero de 2018 en la capital filipina contra los planes gubernamentales de dejar atrás la versión de diésel por otra eléctrica.



© AFP/Ted Aljibe

Filipinas sufre un promedio de 21 tifones cada año, de los cuales unos cinco son especialmente destructores. El cambio climático está intensificando la frecuencia y la potencia de los desastres naturales en el país. En 2013 al menos 6.400 murieron tras el paso del supertifón Haiyan.

intentar detener la propagación de la pandemia de covid-19), las familias de los conductores de *jeepney*, en su mayoría del área metropolitana de Manila, se encuentran entre los trabajadores informales obligados a combatir la pobreza y el hambre, además de la covid. Muchos conductores han tenido que mendigar por las calles para conseguir comida y algunos han convertido sus *jeepneys* en hogares improvisados, al ser desahuciados tras quedarse sin ingresos.

Rogelio Oliva, de 49 años, conductor de *jeepney* desde hace dos décadas, se niega a cambiar su vehículo por uno eléctrico, porque no puede asumir los costes de mantenimiento que supone. “Antes de la pandemia solía ganar más de 1.000 pesos PHP [unos 20 dólares] al día conduciendo entre diez y doce horas. Ahora mis ingresos se han reducido a 500 pesos PHP [unos 9,80 dólares] porque no hay suficientes pasajeros. Si paso a conducir un *e-jeepney*, mis ingresos serán aún menores”.

Oliva explica que sus colegas de profesión que han optado por un *jeepney* eléctrico tienen que pagar ahora el coste adicional de funcionamiento de estos vehículos, los 1.500 pesos PHP mensuales (unos 29,50 dólares) que cuesta cargar la batería, además de tener que cargar sus vehículos durante al menos dos o tres horas antes de poder salir a la carretera. También señala que los motores de los *e-jeepneys* no sobreviven en las anegadas calles de Manila, una ciudad cada vez más propensa a las inundaciones. “Si quiere que cambie-

mos los *e-jeepneys*, el gobierno debe ofrecernos mejores alternativas, como concedernos subvenciones para el mantenimiento; de lo contrario no ganaremos lo suficiente para mantener a nuestras familias”, afirma.

## — “NO PUEDE HABER UNA TRANSICIÓN JUSTA SIN LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES”

En Filipinas, la emergencia climática es algo más que un tema de conversación. Su propensión a las catástrofes naturales, convierte a este país en uno de los lugares más amenazados por el cambio climático, golpeado por un número creciente de ciclones tropicales, inundaciones y corrimientos de tierra, amén de un aumento del nivel del mar superior a la media.

En Filipinas, un país compuesto por 7.641 islas, se da una media de 21 tifones al año, de los cuales al menos cinco son destructivos. En 2020, uno de los ciclones tropicales más

potentes del mundo, el supertifón Goni (Rolly), segó la vida de 32 personas y causó daños por un valor estimado de 415 millones de dólares. En 2013, el [supertifón Haiyan](#), uno de los más mortíferos de los que se tiene constancia, acabó con la vida de al menos a 6.400 personas en todo el país.

El supertifón Rolly, en noviembre del año pasado, causó daños en el suministro eléctrico de la provincia insular de Catanduanes superiores a 120 millones de pesos filipinos PHP (unos 2,36 millones de dólares). Sin embargo, la Administración Nacional de Electrificación (NEA), la agencia gubernamental encargada de apoyar a las cooperativas eléctricas que suministran electricidad a las zonas rurales, sólo proporcionó ayudas en forma de préstamos por valor 20 millones de pesos filipinos PHP (unos 395.000 dólares), lo que obligó a los trabajadores a pedir préstamos comerciales en condiciones más onerosas.

El sindicato Power ha ayudado a los trabajadores de 24 cooperativas eléctricas de todo el país a negociar la inclusión en los convenios colectivos de la sostenibilidad de las operaciones, especialmente durante los desastres naturales. Los convenios colectivos también pretenden proteger estabilidad laboral de los trabajadores en los casos en que la cooperativa cambia a la energía renovable.

Unay afirma que Sentro sigue colaborando con los Ministerios de Medio Ambiente y Energía, que forman parte de la Junta Nacional de Energías Renovables, para convencer al gobierno de que deje de aprobar las solicitudes de construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón. En 2019, el sindicato también inició un estudio piloto sobre el impacto del cambio a las energías renovables por parte de la Cooperativa Eléctrica de Masbate (Maselco), en la provincia de Masbate. Pero el proyecto se ha pospuesto debido a la pandemia.

Los sindicatos también siguen colaborando con la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Competencias (TESDA) en la aplicación de la Ley de Empleos Verdes de 2016, que prevé la reconversión y la mejora de las competencias de los trabajadores de los sectores manufacturero, agrícola y de servicios. La ley también pretende animar a las empresas a generar y mantener empleos verdes ofreciéndoles desgravaciones fiscales y la importación libre de impuestos de los equipos de capital utilizados en la promoción de los empleos respetuosos con el medio ambiente.

“Los sindicatos son las estructuras de mayor envergadura y tienen la fuerza política suficiente para empujar al gobierno a actuar en materia de justicia climática”, dice Mata, de Sentro. Julius Cainglet, vicepresidente de Educación, Investigación y Asociación de la federación sindical Federation of Free Workers (FFW), afirma que los sindicatos necesitan que el gobierno se implique más, especialmente en la Comisión del cambio climático (el único organismo de elaboración de políticas encargado de supervisar la

aplicación de las medidas vinculadas a los compromisos climáticos del país, tal y como se recoge en el Acuerdo de París). Cainglet señala que, si bien los trabajadores filipinos han desempeñado un papel destacado en los esfuerzos globales en pro de los objetivos climáticos, en las reuniones cruciales sobre el clima celebradas a nivel nacional, se les da de lado. “No puede haber una transición justa sin la representación de los trabajadores en la Comisión del cambio climático”, afirma Cainglet.

Los jóvenes activistas climáticos también reclaman una mejor representación en dicha comisión. Se les invita a las consultas como observadores, pero no se les da la oportunidad de hacer aportaciones. “Espero que el gobierno se tome en serio la voz de los jóvenes sobre el cambio climático y adopte nuestras aportaciones para la acción”, dice Mitzi Jonelle, coordinadora de campaña de los jóvenes por la acción climática Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP) y principal organizadora de las concentraciones masivas de estudiantes y jóvenes de toda Filipinas de los Viernes por el Futuro, inspiradas por la activista medioambiental sueca Greta Thunberg.

Lamentablemente, hacer campaña por la justicia climática puede resultar extremadamente peligroso en Filipinas. Según el grupo de derechos humanos Global Witness, con sede en Londres, en 2019 asesinaron en Filipinas a 43 activistas y el país [se situó como el segundo lugar más peligroso del mundo para los defensores del planeta y del medio ambiente](#). La propia Jonelle está “tachada en rojo” –es decir, incluida en una lista negra de objetivos de la Policía y el Ejército, que maliciosamente etiqueta de “comunistas” o “terroristas” a quienes adoptan una postura crítica con el gobierno–, a pesar de que el trabajo de YACAP es pacífico: desarrollan módulos pedagógicos para escuelas sobre el cambio climático y de educación climática para agricultores y grupos de mujeres. “Es aterrador, pero también me indigna esa acusación. La lucha por la justicia climática ya no tiene que ver solo con el medio ambiente: nuestras vidas también están en juego”, concluye Jonelle.

# ‘HOJA DE RUTA DE TARANAKI-2050’: ¿UN MODELO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN NUEVA ZELANDA?

## POR SITARA MORGENSTER



© Steven Scott Taylor/Alamy Live News

Imagen de un encuentro mantenido entre miembros de la unión E tū con la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern durante la Cumbre de mayo de 2019 de Transición Justa de Taranaki. La ‘Hoja de ruta de Taranaki para 2050’, todo un referente, fue creada en 2018 para ayudar a la región de Taranaki en la transición desde los sectores dependientes del carbón hacia un futuro verde y próspero en 2050.

*“Los sindicatos llevan mucho tiempo preocupados por el cambio climático. Cuando el sustento de sus miembros está en riesgo, los sindicatos se alzan –y con el cambio climático el sustento de nuestros miembros está en peligro–”.*

La mayoría de la gente fuera de Nueva Zelanda no reconoce instantáneamente el nombre de Taranaki. Esta región verde y fértil situada en la costa occidental de la Isla Norte empezó a hacerse famosa como destino turístico cuando la guía de viajes *Lonely Planet* la incluyó en el segundo lugar de su [lista mundial de ‘las 10 mejores regiones para viajar’ en 2017](#). Asimismo, esta región de 120.000 habitantes cuenta con una fuerte presencia maorí y es conocida como ‘la Texas de Nueva Zelanda’ debido a sus enormes reservas de petróleo y gas. Además, constituye un importante centro nacional para la producción de derivados lácteos y agrícolas.

Sin embargo, Taranaki ha elaborado un ambicioso modelo para lograr una transición justa que podría atraer la atención de todo el planeta. En 2018, el Gobierno neozelandés prohibió cualquier futura prospección submarina de petróleo o gas en el país, lo cual propició la creación de la [‘Hoja de ruta de Taranaki para 2050’](#). Este proyecto conjunto constituye un hito en el que participan el Gobierno, los trabajadores, los empleadores, los maorí, las comunidades locales, la sociedad civil y otros interesados. Fue impulsado por la agencia de desarrollo económico de la región, Venture Taranaki, con el objetivo de determinar el aspecto que tendrá el futuro en Taranaki una vez la región aban-

done sus sectores con altas emisiones de carbono, en especial el petróleo, el gas y la producción de lácteos, y logre unas bajas emisiones de carbono.

Se calcula que todavía se están perforando [20 yacimientos petrolíferos y de gas en Taranaki](#), que emplean directamente a unas 4.300 personas y sustentan, también, varios miles de puestos de trabajo directamente vinculados a las cadenas de suministro del sector. En un principio, el anuncio en 2018 de la prohibición suscitó bastante preocupación por la pérdida de empleos, debido a un informe que calculó que el desempleo en la región [aumentaría en un 4,7%](#). Pero ahí es donde la estrategia para lograr una transición justa entra en juego: el abandono de los sectores contaminantes no sucederá de la noche a la mañana, no obstante, es fundamental que se fomente un diálogo social sólido entre todos los elementos de la comunidad para garantizar que la descarbonización no excluya a ningún trabajador.

“Con el tiempo, todos nosotros tendremos que enfrentarnos al hecho de que debemos tomar medidas con respecto al cambio climático. En Taranaki lo están haciendo antes que la mayoría.”

“Con el tiempo, todos nosotros tendremos que enfrentarnos al hecho de que debemos tomar medidas con respecto al cambio climático. En Taranaki lo están haciendo antes que la mayoría”, explica Sam Huggard, un investigador de estrategias de E tū (que significa ‘mantenerse erguido’ en maorí), el mayor [sindicato neozelandés del sector privado que representa a seis industrias](#). Entre febrero y abril de 2019, E tū participó en varias sesiones de *brainstorming* y [actos públicos](#) organizados por Venture Taranaki con el objetivo de recopilar las ideas del máximo número de personas que viven y trabajan en Taranaki sobre el futuro económico de la región en las próximas tres décadas. “Los trabajadores de las industrias de los combustibles fósiles, que han ayudado a construir la prosperidad de la que Nueva Zelanda disfruta, merecen la certeza de una ruta hacia unos trabajos decentes y bien remunerados en nuevas industrias”, dice Huggard.

Asimismo, se organizaron debates sobre cómo diversificar y ecologizar la economía en Taranaki para la gente que, de otro modo, vería peligrar su seguridad laboral y su subsistencia. Tras recopilar las reflexiones iniciales de todos los ciudadanos, las mejores ideas se incorporaron a ‘planes de acción más concretos para la fase de transición’ y se publicaron de forma progresiva entre finales de 2019 y agosto de 2020. La [Hoja de ruta final fue publicada en julio de 2019](#).

En mayo de 2019, con motivo de la inauguración de la Cumbre sobre la Hoja de ruta de Taranaki para 2050, E tū envió a ocho dirigentes “capacitados específicamente para entender el concepto de la transición justa y [servir de enlace](#) entre el proceso de la hoja de ruta y los miembros de los sindicatos en sus respectivos sectores”, señala Huggard.

Durante los últimos dos años han empezado a perfilarse varias iniciativas derivadas de la hoja de ruta: en 2019 se creó en Taranaki un centro para el futuro desarrollo energético, [Ara Ake](#), con un presupuesto de 27 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 19 millones de dólares estadounidenses) que liderará la investigación y el desarrollo de las tecnologías de energía limpia como la eólica y la mareomotriz, los proyectos de desarrollo geotérmico y la energía basada en el hidrógeno, y ayudará a las empresas a crear empleos verdes bien remunerados. También surgieron ideas sobre la diversificación de la explotación del suelo para producir más [cultivos como el de la quinoa](#), convertir las tierras agrícolas en forestales o dejar que se conviertan por sí solas en bosques nativos.

## “PODEMOS RESPONDER AL CAMBIO CLIMÁTICO DE MANERA ACTIVA O REACTIVA”

En 2019, Nueva Zelanda –que ostenta [uno de los niveles más altos de emisiones per cápita de la OCDE](#), debido principalmente a su sector agrícola– fue uno de los primeros países en comprometerse a reducir las emisiones netas de todos los gases de efecto invernadero ([excepto las de metano biogénico](#)) a [cero para 2050](#), tal y como establece el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Sin embargo, hasta la fecha, lo único que ha logrado este país en la lucha contra el cambio climático a nivel nacional ha sido la creación de un marco legislativo. Según el Climate Action Tracker –que analiza las medidas climáticas aprobadas por los gobiernos, en especial las que pretenden limitar el calentamiento global a 1,5°C– el resto de las medidas de Nueva Zelanda se han valorado como [insuficientes](#)

o muy insuficientes. Algunos analistas han llegado a acusar al Gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern de carecer de “integridad, capacidad y voluntad en el ámbito del clima”. “Efectivamente Nueva Zelanda tiene una tarea enorme por delante. Per cápita, nuestras emisiones son increíblemente elevadas. Uno de los mayores retos al que hacemos frente son las emisiones agrícolas, que constituyen prácticamente la mitad de todas nuestras emisiones, y aparte de ciertos fondos de ciencia e innovación dirigidos al sector para que estudie vías para reducir las emisiones, nos está faltando un plan integral para tratar las emisiones de este sector”, asevera Huggard.

Pero como demuestra la Hoja de ruta de Taranaki, sí se están llevando a cabo múltiples actividades decididas a nivel local y re-

“Uno de los mayores retos al que hacemos frente son las emisiones agrícolas, que constituyen prácticamente la mitad de todas nuestras emisiones.”

gional. La aplicación de la Hoja de ruta de Taranaki servirá como ejemplo para el resto de Nueva Zelanda. En la región de Southland, el Gobierno se ha comprometido a aplicar una transición justa para el cierre de la fundición de aluminio de Tiwai Point en diciembre de 2024.

El sindicato de docentes NZEI Te Riu Roa (el Instituto de Formación de Nueva Zelanda, en maorí) es otra organización sindical que participó en la redacción de la Hoja de ruta de Taranaki para 2050. La participación de los sindicatos de profesionales de la educación es importante porque los jóvenes son los que tendrán que enfrentarse a los peores efectos de una crisis climática que cada vez se agrava más. Como Barb Curran, miembro del comité ejecutivo nacional del NZEI, declaró recientemente en una entrevista: “El cambio climático es el problema más grave de nuestra época a largo plazo y va a afectar a todos nuestros profesores, al personal auxiliar y a los niños con los que trabajamos. No podemos preocuparnos por esos niños sin preocuparnos por las consecuencias que tendrá el cambio climático para ellos, actualmente y en el futuro. Por eso es tan importante apoyar una transición justa en Taranaki y en otros sitios”.

El presidente del NZEI, Liam Rutherford, está de acuerdo: “Los sindicatos llevan mucho tiempo preocupados por el cambio climático. Cuando el sustento de sus miembros está en riesgo, los sindicatos se alzan –y con



© Venture Taranaki

Imagen tomada durante una consulta comunitaria en marzo de 2019 de cara a la Hoja de ruta de Taranaki. Los participantes comparten sus ideas.

el cambio climático el sustento de nuestros miembros está en peligro—. Tenemos dos opciones: podemos responder de manera activa o reactiva. Ahora mismo todavía podemos hacerlo de las dos maneras. Se puede percibir el entusiasmo. A los directores de las escuelas les encanta la idea, pero muchos de ellos todavía no saben cómo [pasar a la acción]. Además, las escuelas de muchas regiones tienen necesidades mucho más acuciantes, especialmente en zonas socioeconómicas menos favorecidas”.

El NZEI Te Riu Roa ha contratado a una coordinadora comunitaria especializada para que trabaje los temas del cambio climático con sus miembros: Conor Twyford. Contactada por *Equal Times*, esta coordinadora no nos invita a un *hui*, sino a un *zhui*. *Hui* es la palabra tradicional maorí para una reunión de gente con el objetivo de ‘tener una buena charla’ –o *kōrero*–. Un *zhui* es como un *hui*... pero en Zoom. La reunión tiene lugar un martes por la noche poco corriente, con una Nueva Zelanda confinada de nuevo con el nivel máximo de restricciones debido a un nuevo brote de coronavirus. La mayoría de los participantes ya han pasado casi todo el día en línea trabajando o dando clases desde el hogar, a menudo con la casa al completo de familiares, mientras intentaban mantener una sensación de cierta normalidad en un mundo desquiciado. Algunos de ellos han estado físicamente en la escuela.

“La urgencia de la adopción de medidas es obvia y los participantes están ansiosos por utilizar sus redes, habilidades y roles pedagógicos para lograr cambios en el terreno práctico.”

La pantalla de nuestro ordenador empieza a brillar y las imágenes congeladas se empiezan a mover. Un total de casi 150 personas están retransmitiendo desde todos los rincones del país. El mero hecho de conectarse en estos tiempos tan difíciles para hablar del cambio climático de un modo práctico, motivar y compartir experiencias constituye un testimonio de su entusiasmo. Por ejemplo, algunas escuelas participan en programas de huertos comunitarios que utilizan el *maramataka*, el calendario lunar tradicional de los maoríes, mientras que las escuelas en Waitara, una pequeña población en Taranaki con altos niveles de carencia, han estado ayudando a los jóvenes y sus familias a cuidar los arroyos y a fomentar la recuperación de los humedales. Twyford nos cuenta: “La mayor parte de las escuelas ya están haciendo algo y nosotros podemos conectar a la gente. Así es como podemos utilizar la sólida estructura del sindicato de docentes, tan bien organizada a lo largo de la historia”.

## COMBINAR LA AMBICIÓN CLIMÁTICA CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Aunque los sindicatos de Nueva Zelanda están asumiendo rápidamente el impacto que tienen las políticas climáticas en la vida de sus miembros, movilizar a la gente sobre el terreno puede resultar difícil. Algunos sindicalistas creen que el año 2050 está demasiado lejos como para ponerse a pensar en ello, aunque normalmente suelen ser los miembros de más edad los que piensan así. En lo que se refiere al sector de la educación, a pesar de que es posible que los trabajadores del gremio no se tengan que enfrentar a la pérdida de sus empleos como resultado directo del cambio climático, todavía se percibe un gran interés por el tema del clima. Hace tiempo que los docentes han incluido los temas medioambientales en sus interacciones con los alumnos y desempeñan un papel importante en la comunidad más general.

“Podemos ofrecer algo más que clases de nueve a tres”, asegura Rutherford. “Las escuelas son instituciones que inspiran confianza”. Sin embargo, también hace hincapié en que el Gobierno debería tomarse más en serio la transición justa. Muchas cuestiones importantes necesitan más fondos; por ejemplo, la transformación de los sistemas de calefacción en casi la mitad de las escuelas neozelandesas para convertirlos en sistemas de energía renovable. 50 millones de dólares neozelandeses (alrededor de 35 millones de dólares estadounidenses) procedentes de un nuevo fondo para la descarbonización se destinaron a menos de 20 escuelas, pero todavía hay cientos de centros educativos en todo el país que siguen usando combustibles fósiles y carecen del presupuesto para invertir en energías alternativas. El Gobierno parece ignorar la magnitud de este problema.

Volviendo al *zhui*: es evidente que el tema del cambio climático motiva a las casi 150 personas que participan en la videollamada. La

urgencia de la adopción de medidas es obvia y los participantes están ansiosos por utilizar sus redes, habilidades y roles pedagógicos para lograr cambios en el terreno práctico. Estas personas no lo están haciendo para sacar beneficio de manera individual; se están implicando para intentar salvar a *Papatūānuku* (la tierra, una poderosa Madre Tierra) y a todos sus habitantes y para cambiar el futuro de sus *tamariki* (hijos).

De vuelta a Taranaki, la coordinadora climática del NZEI en la región, Kate Paris, tiene planes para proyectar [High Tide, Don't Hide](#), un documental de 2021 sobre las protestas climáticas lideradas por los jóvenes que hicieron que, en los últimos años, cientos de miles de neozelandeses salieran a las calles a manifestarse. El documental sigue a varios jóvenes organizadores del movimiento en una curva progresiva de aprendizaje, mientras se van

implicando y tomando las riendas del activismo en representación de su generación.

La proyección del documental dará la oportunidad a la gente de la zona de conocerse de forma informal, compartir ideas y experiencias y les ayudará a crear un plan de acción. “A menudo pienso que lo mejor que se puede hacer es llevar a nuestros estudiantes a la naturaleza y hacer que conecten con ella. Hacer que identifiquen pájaros, por ejemplo”, propone Paris. “Cosas simples. Cosas que no cuestan dinero. Después de todo ellos son los *kaitiaki* (guardianes del medioambiente) del futuro. Si se sienten conectados con la naturaleza, la protegerán”.



© Venture Taranaki

Los alumnos de la escuela Waitara East School de Taranaki, entre otros de la región, desarrollan diversas actividades sobre la cuestión del cambio climático.

# LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN SERBIA, UNA ASIGNATURA TAN NECESARIA COMO DIFÍCIL DE PONER EN MARCHA

POR LOUIS SEILLER



© Louis Seiller

La cuenca minera de Kolubara emplea a 18.000 personas.

*“Hace unos años, el cambio climático y la transición justa eran cuestiones que no interesaban a los sindicatos de la región. Los temas importantes eran los salarios, el diálogo social, las reformas de las pensiones y fiscales. Pero desde hace unos cuatro años todo el mundo ha entendido por qué es importante una transición justa. El cambio climático, la contaminación, etc., nos afectan a todos, y todos sufrimos las consecuencias de las opciones y decisiones adoptadas en el pasado”.*

Algunos pensaron que se trataba del primer paso hacia una transición energética, pero para los miles de “caras negras” que traba-

jan en las minas de carbón de Serbia, y para sus familias, la carta enviada la pasada primavera por la ministra de Minas y Energía, Zorana Mihajlovic, supuso un jarro de agua fría. En la carta, la ministra pedía a la dirección de la empresa estatal Elektroprivreda Srbije (EPS) que interrumpiera las actividades ligadas a la construcción de la central termoeléctrica de carbón Kolubara B, de 350 MW. Este proyecto, que se presentó hace ya 40 años, ha sido abandonado y relanzado varias veces. Un mes antes, en abril, el Parlamento serbio había aprobado una innovadora ley sobre fuentes de energía renovables

que allanaba el camino hacia la descarbonización del sector energético. El texto prevé un aumento de la cuota de las energías renovables en el mix energético serbio –dominado en un 70% por el carbón y en algo menos del 30% por la hidroelectricidad–.

La misiva de la ministra desencadenó de inmediato las protestas de los trabajadores de Kolubara, un complejo minero situado a unos 50 kilómetros al suroeste de la capital, Belgrado. Varios miles de trabajadores se manifestaron a pie de obra convocados por Miodrag Rankovic, presidente de RB Kolubara, el principal sindicato de la cuenca minera de Kolubara. “No nos oponemos a una transición energética lenta, pero no pueden cerrar nuestras centrales eléctricas de la noche a la mañana”, afirma este hijo y nieto de mineros que empezó a trabajar en la mina de carbón en 1981. “La mayoría de la gente de nuestra región depende de la minería del carbón. La energía solar o la eólica no crean muchos puestos de trabajo. Si cerramos las centrales eléctricas, ¿qué pasará con los trabajadores? Habrá pérdidas de empleos, pero también recortes salariales”.

“La anterior transición del socialismo a la economía de mercado, aún en curso, ha dejado huellas y un profundo resentimiento entre los trabajadores serbios. La palabra ‘transición’ suele ser, para ellos, sinónimo de privatizaciones, empobrecimiento y de pérdida de derechos sociales.”

En Serbia, “Kolubara” es un nombre indisolublemente ligado a la electricidad. Desde los tiempos de la planificación económica yugoslava, a principios de los años cincuenta, la cuenca de este río que recorre el centro del país ha sido el corazón de la producción energética nacional. Las enormes reservas de lignito de la región proporcionan el 75% de la producción de carbón y las diversas centrales eléctricas del complejo aportan más de la mitad de la producción de electricidad a este país de siete millones de habitantes, el mayor de los Balcanes Occidentales. Aunque su plantilla viene disminuyendo como consecuencia de las privatizaciones y las reestructuraciones de la década del 2000, EPS sigue siendo uno de los mayores empleadores de Serbia, con casi 30.000 trabajadores. Esta poderosa empresa pública ha definido durante mucho tiempo la estrategia energética del país. En Kolubara, 18.000 empleados trabajan para EPS y sus subcontratistas; 16.000 de ellos están afiliados al sindicato presidido por Miodrag Rankovic.

## ALTA DEPENDENCIA ECONÓMICA DEL CARBÓN

“Tener tantas reservas es un regalo de la naturaleza y una inmensa riqueza para un país pequeño como el nuestro: nos garantiza la independencia energética”, nos explica Rankovic desde sus oficinas, justo detrás de la plaza de la iglesia, en Lazarevac. “Pero los grandes países de la Unión Europea nos tienen hoy sometidos a enormes presiones [Serbia es candidata oficial a la adhesión a la UE desde 2012], quieren hacernos dependientes a través de las energías verdes. En el pasado reciente hemos soportado muchas cosas: la inflación, la falta de productos de primera necesidad, los bombardeos [de la OTAN en 1999], pero siempre hemos podido contar con nuestros propios alimentos y, sobre todo, con nuestra energía, y eso nos ha permitido sobrevivir”. La noción de independencia resuena con fuerza en la sociedad serbia: el país quedó profundamente marcado por su aislamiento de la escena internacional hace veinte años, y una gran parte de la población es sensible a los discursos patrióticos.

El olor acre del carbón y el paisaje devastado de las minas a cielo abierto son el día a día de los habitantes de los alrededores de Lazarevac, la mayor ciudad de la cuenca del Kolubara. A lo largo del río, las minas no han dejado de expandirse, fagocitando casas y campos. Las chimeneas de las centrales eléctricas expulsan su humo gris a unos metros de las casas y los cultivos agrícolas, pero pocos aquí se ofuscan por el impacto que pueda tener sobre su salud o reclaman otro medio ambiente.

A pesar de su calidad mediocre y su alto contenido en azufre, que lo hace especialmente contaminante, el lignito ha enriquecido esta región. Su extracción a gran escala ha atraído a trabajadores de todo el país y sigue constituyendo un pilar de la economía nacional.

En 2019, Serbia produjo **39 millones de toneladas de lignito**, lo que sitúa al país entre los 15 principales productores del mundo.

Aunque una cuarta parte de la población se debate hoy en la pobreza económica, la calidad de las infraestructuras y los servicios locales de la región de Kolubara dan fe **de una cierta calidad de vida**, basada en la explotación del lignito. Según el sindicato local, el salario de un trabajador en Kolubara alcanza los 800 euros, una suma considerable teniendo en cuenta que el salario medio en Serbia es de 460 euros y el desempleo afecta a casi el 15% de la población activa.

Las imágenes de la movilización de los mineros en mayo tuvieron cierta repercusión en el país. Para los sindicalistas, despertaron el recuerdo de luchas míticas. **La huelga de los mineros de Kolubara** jugó un papel fundamental en la revolución del año 2000, que condujo al derrocamiento del régimen belicista del presidente ultranacionalista Slobodan Milosevic, que acabó siendo juzgado por el Tribunal de La Haya y muriendo en prisión. “Se me sigue poniendo la piel de gallina cuando los mineros de Kolubara se ponen en huelga”, sonríe Dragana Petkovic-Gajic, que lleva 30 años colaborando con la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), la principal confederación sindical del país. “Sus movilizaciones siempre tienen un componente muy simbólico. Sus huelgas son escasas y tienen un carácter emocional muy fuerte, porque hacen un trabajo muy duro. Si se deciden a protestar

es porque tienen buenas razones para estar preocupados”, añade.

Se calcula que el subsuelo serbio contiene más de 4.000 millones de toneladas de lignito. Con estas reservas que parecen inagotables y garantizan una electricidad asequible al consumidor, **aunque esté fuertemente subvencionada por el Estado**, pocos se preocupan aún en Serbia por la urgencia del cambio climático o de avanzar hacia un futuro descarbonizado. Los partidarios del lignito aducen como prueba la actual escalada de los precios del gas y la inestabilidad de la producción eólica: advierten que los precios de la energía se dispararán si se elimina el carbón. Pero el número cada vez mayor de estudios que advierten sobre su alarmante impacto en la salud, unido a las consecuencias cada vez más obvias del cambio climático, han empujado a muchos a adaptar su discurso, en particular a los sindicatos.



© Louis Seiller

*Debido a la antigüedad de las centrales de carbón, estas no cumplen los requisitos medioambientales de la UE.*

## CONCIENCIARSE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA TRANSICIÓN

En 2014, Serbia, como el resto de los Balcanes, sufrió unas inundaciones de una magnitud sin precedentes que provocaron la muerte de 33 personas y daños materiales de más de 1.500 millones de euros. La crecida del río Kolubara paralizó la producción de carbón durante más de una semana. “Hace unos años, el cambio climático y la transición justa eran cuestiones que no interesaban a los sindicatos de la región”, reconoce Enisa Salimovic, coordinadora del Equipo de la Oficina de la CSI para Europa Oriental y Meridional de la Confederación Sindical Internacional (CSI). “Los temas importantes eran los salarios, el diálogo social, las reformas de las pensiones y fiscales... Pero desde hace unos cuatro años todo el mundo ha entendido por qué es importante una transición justa. El cambio climático, la contaminación, etcétera, nos afectan a todos, y todos sufrimos las consecuencias de las opciones y decisiones adoptadas en el pasado”, enfatiza.

“En 2015 firmamos el Acuerdo de París y... nada. Las autoridades pronuncian discursos esporádicos sobre la necesidad de un cambio, pero no hacen nada. Ahora las autoridades se ven obligadas a actuar, porque la mayoría de los países se han puesto manos a la obra, pero ya es muy tarde. Y, si esperamos más, será imposible que la transición sea justa.”

Según un informe dirigido por la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente (HEAL), la contaminación atmosférica de las centrales eléctricas de carbón en los Balcanes Occidentales es responsable de unas 3.900 muertes prematuras en Europa, así como de 8.500 casos de bronquitis en niños y de muchas otras enfermedades crónicas. Serbia tiene el mayor número de muertes relacionadas con la contaminación en Europa, con el triste récord de 175 por cada 100.000 habitantes. El dramático impacto del carbón en la salud humana, empezando por la de los trabajadores y sus familias, se ha impuesto en la agenda de los sindicatos de estos países, candidatos todos a la integración en la UE. No hay que olvidar que las centrales eléctricas construidas en la época yugoslava suelen ser vetustas y de las más contaminantes del continente europeo. Según un estudio publicado a finales de 2019 por la ONG Bankwatch CEE, 16 centrales eléctricas de los Balcanes emiten tanto dióxido de azufre como el conjunto de las 250 centrales de carbón de la UE. De las diez plantas más contaminantes, cuatro se encuentran en Serbia. Sus nubes mortales no se detienen en la frontera Serbia

y esta contaminación afecta también a los ciudadanos de la UE.

En 2020 Serbia emitió 333.602 toneladas de dióxido de azufre, es decir, tanto como el conjunto de los Estados miembros de la UE. Este país está obligado por sus compromisos internacionales a reducir drásticamente sus emisiones: como candidato a la UE, como firmante del Acuerdo de París de 2015 para limitar el calentamiento global y como miembro de la Comunidad Europea de la Energía, creada en 2006. “De acuerdo con las obligaciones contraídas en el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía, Serbia debía aplicar nuevas normas el 1 de enero de 2018, pero, a pesar de ello, continúa emitiendo seis veces más Co<sub>2</sub> de lo que permiten estas normas”, explica Hristina

Vojvodic, del Instituto de Regulación de Energías Renovables y Medio Ambiente (RERI). “Lamentablemente no hay ningún plan para reducir estas emisiones. Nos hemos dirigido repetidas veces a la inspección, pero nos han contestado que no podían hacer nada. La Comunidad de la Energía ha iniciado un procedimiento contra Serbia por incumplimiento de sus compromisos”.

El incumplimiento de los compromisos por parte de Serbia tiene un coste, tanto sanitario como económico. Según la ONG Bankwatch, la contaminación por las emisiones de carbón en 2020 supuso la pérdida de más de 600.000 días de trabajo y una factura total de unos 5.000 millones de euros. Estas cifras no dejan completamente indiferente al Gobierno del conservador y autoritario presidente serbio Aleksandar Vucic. Serbia, por ejemplo, ha firmado la Declaración de Sofía de 2020 sobre la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales que supone el compromiso de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Sin embargo, hay actores que lamentan el doble discurso del Gobierno serbio y la falta de transparencia en los procesos decisorios. El proyecto gubernamental de ordenación territorial para 2021-2035, por ejemplo, prevé la construcción de seis nuevas centrales eléctricas de carbón.

“Conocemos las implicaciones de la transición justa desde 2006, pero nadie ha hecho nada”, lamenta Hristina Vojvodic, de la ONG RERI. “En 2015 firmamos el Acuerdo de París y... nada. Las autoridades pronuncian discursos esporádicos sobre la necesidad de un cambio, pero no hacen nada. Ahora las autoridades se ven obligadas a actuar, porque la mayoría de los países se han puesto manos a la obra, pero ya es muy tarde. Y, si esperamos más, será imposible que la transición sea justa”. Este verano, al tiempo que pregonaba el lanzamiento de proyectos de energía solar e hidroeléctrica de bajas emisiones de carbono, el presidente serbio reiteró **su apoyo a la industria del carbón** como garantía de independencia y seguridad nacional.

## LA PRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Si el Gobierno serbio parece hoy verse obligado a posicionarse sobre las cuestiones energéticas es sólo gracias a la creciente presión a la que le está sometiendo la sociedad civil. En los últimos meses el país ha sido testigo de **manifestaciones multitudinarias** que reclaman un cambio en la política medioambiental. Los belgradenses se sienten cada vez más exasperados por los humos tóxicos que emanan de las centrales eléctricas del complejo Nikola Tesla que cada invierno sume en **un esmog irrespirable** a esta ciudad de dos millones de habitantes, y la sitúan entre las diez capitales más contaminadas del mundo. Estas movilizaciones han

metido las cuestiones medioambientales en el debate político y han dado lugar a una coalición inédita de actores políticos, que están elaborando sus propias estrategias para una transición verde sin olvidar al mundo del trabajo. Predrag Momcilovic es especialista en cuestiones energéticas en el seno del movimiento social Ne Davimo Beograd.

“Recientemente, a petición de algunos sindicatos, ofrecí tres presentaciones sobre el papel de los sindicatos en la transición justa. Adoptaron varias decisiones como: ‘No hay trabajo en un planeta muerto’. Para mi gusto siguen avanzando con demasiada lentitud, pero están empezando a pensar en estos problemas”, expone.

Los sindicatos prestan atención a estas nuevas demandas ciudadanas, aunque les preocupen las desastrosas consecuencias sociales de una transición precipitada. La anterior transición del socialismo a la economía de mercado, aún en curso, ha dejado huellas y un profundo resentimiento entre los tra-



Miodrag Rankovic, presidente del principal sindicato de la cuenca minera de Kolubara, RB Kolubara.

bajadores serbios. La palabra “transición” suele ser, para ellos, sinónimo de privatizaciones, empobrecimiento y de pérdida de derechos sociales. “Cuando enchufan sus teléfonos, a la gente no le importa el origen de la electricidad que consumen, les da igual, pero hay personas detrás de los enchufes”, dice Enisa Salimovic.

“Ya hemos vivido varias transiciones: tras la disolución de la Yugoslavia socialista salimos de una economía planificada y mucha gente sigue pensando que el Estado tiene la responsabilidad de responder a los problemas de empleo. La población continúa esperando mucho del Estado y, probablemente, esta es la transición más difícil de lograr: la de las mentalidades”.

Para cambiar esta forma de pensar, los sindicatos están situando el concepto de “transición justa” en el centro de sus programas. Han comenzado por incidir en la labor de sensibilización y la educación, organizando seminarios y mesas redondas sobre el tema. Se trata de un paso esencial en un país en el que, por falta de voluntad política real para contrarrestarlo, las pruebas científicas del cambio climático se siguen poniendo en cuestión y las teorías conspirativas son especialmente populares. “Hay que ir paso a paso, porque la transición justa es un tema muy inflamable”, advierte Dragana Petkovic-Gajic. “Pero como organización sindical, siempre hemos tenido que lidiar con temas complicados: el diálogo social, el trabajo informal... Ahora se trata de la transición justa y debemos abordarla, pero necesitamos tiempo para prepararnos. Esta es una cuestión que se plantea más en los países de Europa oriental que occidental. Cada país y cada sindicato tiene sus propios problemas: los países occidentales tienen que entender que necesitamos una actitud equilibrada con respecto a la transición justa”.

Una preocupación justificada: según numerosos actores, a pesar de haberse comprometido a descarbonizar la economía de aquí a 2050, el Gobierno serbio aún carece de una estrategia social para salir del carbón. Los sindicatos temen por el futuro de las regiones mineras que ahora dependen totalmente de la extracción de lignito. Las escuelas de formación profesional de la región de Kolubara, por ejemplo, siguen formando a las nuevas generaciones como mineros, sin adaptar sus planes de estudio a los nuevos retos climático y energético. “Podemos aprender de las antiguas regiones carboníferas de Europa que ya están poniendo en marcha esta transición justa”, asegura Predrag Momcilovic. “Pero para que esto ocurra es necesario un fuerte apoyo estatal, una inversión sustanciosa en otras industrias renovables que facilite una reconversión de los empleados del carbón. Pero también es importante que estos empleos verdes ofrezcan salarios decentes y buenas condiciones laborales. Cada vez son más los trabajadores del carbón con contratos temporales y sin derecho a sindicarse”.

## FINANCIAR LA TRANSICIÓN, EL VERDADERO RETO

Reconversión industrial, formación, medidas de acompañamiento y jubilaciones anticipadas, etc., todo el mundo está de acuerdo:

la transición energética conlleva un coste y una inversión considerables que Serbia no podrá asumir sin la ayuda de socios externos. “El sector energético necesita con urgencia dinero para realizar esta transición justa”, resume Dragana Petkovic-Gajic. “Los países europeos deben ayudar a Serbia. Los trabajadores piensan que la transición dejará ‘seco’ al país, como le sucedió en la anterior transición y con las privatizaciones. Están convencidos de que se quedarán sin dinero”.

La financiación de la transición energética dependerá también de la evolución del posicionamiento geopolítico de los dirigentes serbios. Algunas de sus recientes decisiones económicas hacen temer una posible renuncia a algunos de sus compromisos internacionales. “Por un lado se nos repite que algún día seremos miembros de la UE”, explica Hristina Vojvodic. “Pero, por otro lado, se toman decisiones contrarias a los compromisos europeos. Se utiliza un doble discurso, uno dirigido a la sociedad serbia y otro a los actores extranjeros. Pero esto no es sostenible a largo plazo. China, especialmente activa en el país, ha multiplicado sus inversiones en Serbia en los últimos años y está financiando, sobre todo, actividades industriales contaminantes que no respetan las normas medioambientales de la UE, como la central eléctrica de carbón Kostulac B3. Queda por ver qué impacto tendrá en Serbia el reciente compromiso del presidente chino Xi Jinping de no construir nuevas centrales eléctricas de carbón en el extranjero. Por parte de los financieros europeos, el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a los proyectos de energía eólica y su abandono del carbón son los primeros pasos concretos hacia la diversificación energética.

La transición energética en Serbia apenas está dando sus primeros pasos por falta de una voluntad política clara, pero su impacto en los miles de trabajadores del carbón dependerá del apoyo financiero indispensable del exterior y de la capacidad de los sindicatos y de la sociedad civil para asumir estos desafíos e influir en los responsables políticos.

# A FALTA DE LEYES FEDERALES, LOS SINDICATOS ESTADOUNIDENSES SIENTAN LAS BASES PARA UNA ECONOMÍA DESCARBONIZADA

POR INDIGO OLIVIER



© Sean Sprague/Alamy

En esta imagen de octubre de 2021, cinco activistas por el clima en huelga de hambre se manifiestan, junto con numerosos simpatizantes frente a la Casa Blanca. Los activistas, parte del movimiento Sunshine, piden al presidente de EEUU, Joe Biden, acción decisiva respecto al cambio climático para evitar que el presupuesto de la agenda social y medioambiental se diluya.

*“Cada vez que hay un gran cambio, los trabajadores estadounidenses salen perdiendo, ya sea por la liberalización, la externalización o el comercio libre”. ¿Qué se está haciendo para garantizar que el proceso de descarbonización sea diferente?*

Cuando la congresista Alexandria Ocasio-Cortez presentó el Nuevo Acuerdo Verde (NAV) ante el Congreso estadounidense en 2019, muchas personas dentro del ámbito sindical reaccionaron con un profundo escepticismo. El NAV se presentó como una resolución

no vinculante que reconocía la obligación de Estados Unidos de lograr las cero emisiones netas para 2050 y crear millones de puestos de trabajo con salarios altos mediante “una transición justa para todos los trabajadores y comunidades”.

El presidente de entonces de la central sindical American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), que representa a más de 12 millones de

trabajadores de 57 sindicatos, **declaró ante la prensa** que no habían consultado a los sindicatos antes de presentar el NAV.

El término ‘transición justa’ –que aparece mencionado en la resolución de 14 páginas tan solo en una ocasión– es un marco que se originó **en el movimiento sindical estadounidense**. Constituye un compromiso para que los trabajadores y comunidades más afectados por la transición pasen de una economía extractiva a una con huella neutra de carbono. Sin embargo, tal y como estaba redactada la resolución de 2019, los sindicatos más afectados por dicha transición creían que dejaba demasiadas cuestiones sin responder.

Brad Markell, director ejecutivo del consejo de sindicatos industriales de la AFL-CIO y presidente de su grupo de trabajo sobre energías, asegura que dicha reticencia está basada en las experiencias de la clase trabajadora estadounidense durante los últimos 40 años. “Cada vez que hay un cambio, los trabajadores salen perdiendo, ya sea por la **liberalización**, la externalización o el **comercio libre**”, afirma Markell.

Markell posee una amplia experiencia en el ámbito de la manufactura. En 1993 le despidieron de su trabajo en una fábrica de General Motors en **Detroit** (estado de Michigan) y luego le trasladaron a otra fábrica a una hora de distancia, en Toledo (estado de Ohio). “Yo fui uno de los afortunados”, explica a *Equal Times*. “Normalmente, la gente a la que despiden de un puesto de trabajo con un salario alto no consigue otro puesto similar. Como en nuestras comunidades no se están creando buenos empleos para mantener a las familias, se van a conformar y a aferrar como puedan [a cualquier tipo de trabajo que consigan]”.

“Normalmente, la gente a la que despiden de un puesto de trabajo con un salario alto no consigue otro puesto similar. Como en nuestras comunidades no se están creando buenos empleos para mantener a las familias, se van a conformar y a aferrar como puedan [a cualquier tipo de trabajo que consigan].”

Según nos cuenta, para poder superar el escepticismo de los trabajadores ante términos como el de la ‘transición justa’ habrá que invertir en sus comunidades para generar buenos puestos de trabajo. Un **informe de 2021** publicado por la ONG Energy Futures Initiative calcula que en Estados Unidos existen 345.000 trabajadores en el sector de la energía solar y 114.000 en el de la energía

eólica, una cifra ínfima si se compara con los 1,6 millones de trabajadores del petróleo, el carbón y el gas natural. En dichas cifras se incluyen los instaladores de paneles solares, los técnicos de aerogeneradores, los ingenieros y los electricistas, entre otros. “Gran parte del problema reside en que la mayoría del sector de las energías renovables es antisindicalista y están ofreciendo empleos precarios de baja calidad”, explica Markell. “Eso es lo que resulta tan increíble de lo que se está perfilando para la energía eólica marina en Estados Unidos”.

## — ØRSTED Y REIMAGINE APPALACHIA – UN ACUERDO HISTÓRICO Y UN MODELO

A finales de 2020, la central de sindicatos de la construcción North America’s Building Trades Unions (NABTU), que representa a más de tres millones de trabajadores de toda Norteamérica, firmó **un acuerdo histórico** con la mayor empresa de energía eólica marina del mundo, una compañía danesa de energía llamada Ørsted, para poner en marcha el proceso de transición de los trabajadores de la construcción al sector de la energía eólica marina. En el acuerdo, la empresa se compromete a formar a dichos trabajadores para que en un futuro trabajen en los proyectos marinos, así como a utilizar la mano de obra sindicalizada en los diversos proyectos que hay previstos a lo largo de la costa este de Estados Unidos.

Dicho acuerdo fue una iniciativa colaborativa internacional desarrollada por el Centro de Transición Justa (CTJ) –un grupo que forma parte de la Central Sindical Internacional (CSI)–. En 2019, la presidenta de la AFL-CIO, Liz Shuler, entonces secretaria de la Tesorería, viajó a Dinamarca y Noruega para reunirse con los directivos de Ørsted. Markell reconoce el mérito de Shuler por haber incluido a la AFL-CIO y la NABTU en la mesa de negociaciones.

En Dinamarca, las acciones de los sindicatos locales sentaron las bases para el acuer-



© NREL

*El parque eólico Block Island, en Rhode Island, propiedad y operado por la compañía danesa Ørsted, es el primer parque eólico costa afuera de EEUU.*

do entre la NABTU y Ørsted. Primero convencieron a la empresa para que firmara un compromiso mundial de transición justa, explica Samantha Smith, la directora del CTJ, y luego los sindicatos daneses ejercieron una presión constante. En 2016, aproximadamente en la época en la que Smith asumió su cargo en el CTJ, tuvo una conversación directa con el Laborers' International Union of North America (LiUNA) –un sindicato de 500.000 miembros con una fuerte presencia en los sectores de la construcción y la energía–. El LiUNA se ha mostrado especialmente crítico con el Nuevo Acuerdo Verde, pero cuando Smith habló con ellos sobre la transición justa, declararon: “Construiremos lo que sea, pero estas grandes empresas de energías renovables tienen unas normas de trabajo deplorables”.

En 2017, la AFL-CIO aprobó una **resolución** en la que se comprometía a “luchar política y jurídicamente” por los trabajadores afectados por la transición a las energías limpias. Según el comunicado que publicaron, “... el modo más rápido y equitativo de abordar el cambio climático sería colocando a los trabajadores en el núcleo de la creación de soluciones que reduzcan las emisiones”. A falta de leyes federales, varias secciones estatales y locales de la AFL-CIO se han estado dedicando a sentar las bases para la transición mediante la elaboración de políticas y debates con sus miembros.

Reimagine Appalachia es una amplia coalición de organizaciones medioambientales y sindicales presente en cuatro estados de la principal región carbonífera de Estados Unidos: Pensilvania, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental. A finales de mayo, los presidentes de cada sección sindical de la AFL-CIO publicaron **una serie de libros blancos** en los que detallaban su propuesta de

un “plan federal para la infraestructura en los Apalaches”. Antes de publicar su **modelo** a principios de este año, la coalición dedicó **meses** a organizar reuniones y audiencias para debatir con sus miembros y con líderes sindicales sobre el posible marco normativo basado en los sindicatos. Su propuesta se basa en reconstruir a la clase trabajadora en la región mediante inversiones federales y la creación de empleos sindicalizados para construir una economía verde.

“Para transformar la región de los Apalaches en una economía sostenible del siglo XXI – una que sea buena para los trabajadores, las comunidades y nuestra salud – se necesitarán considerables recursos federales”, reza su modelo. “No podemos ni debemos conformarnos con menos, debido a los ingentes recursos que se han extraído de los Apalaches durante los últimos siglos”.

La coalición se basa en la presunción de que en breve se van a aprobar leyes federales sobre el clima y los trabajadores deben estar preparados para cuando esto ocurra. El modelo propone la creación de oportunidades para los trabajadores de los sectores extractivos, proyectos financiados públicamente con buenas condiciones laborales, una red eléctrica modernizada,

unos procesos de producción limpios, un transporte sostenible y una versión moderna del Cuerpo Civil de Conservación –un programa de empleo de la época del New Deal que puso a trabajar a tres millones de desempleados plantando árboles y construyendo parques durante la Gran Depresión–.

## LOS SINDICATOS SE ORGANIZAN CON RESPECTO AL CLIMA Y ESPERAN A QUE SE APRUEBEN LEYES FEDERALES

Otros sindicatos de todo el país también están iniciando una gran cantidad de ambiciosos proyectos relacionados con el clima.

En el estado de Nueva York, una coalición de sindicatos que representan a 2,6 millones de trabajadores de los sectores de la construcción, el transporte, la energía y los servicios públicos, entre otros, han formado la organización Climate Jobs Nueva York (CJNY). Este grupo ha respaldado una ley estatal que abre la vía para que Nueva York logre el 100% de energías renovables para 2040 y obliga a ratificar un Acuerdo Sindical de Proyecto (convenios colectivos entre los sindicatos de la construcción y los contratistas) para todos los proyectos relacionados con la energía eólica marina. Mediante las alianzas con organizaciones medioambientales locales, la CJNY también ha luchado para que se invierta más en infraestructuras de energías renovables. Con

cinco proyectos de energía eólica marina en fase de desarrollo, actualmente Nueva York cuenta con la mayor instalación eólica del país, que se espera que cubra casi la mitad de las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York para 2035.

En el mayor estado productor de petróleo de Estados Unidos, el pasado julio la AFL-CIO de Texas votó a favor de una resolución que respaldaba el Proyecto de Climate Jobs para Texas. Si se llega a aplicar, se espera que el plan genere más de un millón de puestos de trabajo en los próximos 25 años mediante el desarrollo de la energía eólica y solar, abordando al mismo tiempo las “crisis convergentes” de la pandemia, la disparidad de ingresos, la injusticia racial y la emergencia climática.

Pocas semanas después de las elecciones de 2020 se creó una coalición llamada Climate Jobs Rhode Island (RI) entre organizaciones sindicales y medioambientales de dicho estado. La Climate Jobs RI ha propuesto varios objetivos entre los que se encuentran “institucionalizar el concepto de la transición jus-



© AFP/Saul Loeb

Un operario trabaja sobre una pila de carbón en la planta de American Electric Power (AEP), en New Haven, Virginia Occidental, en 2009. Este es uno de los cuatro estados que conforman el corazón carbonífero de EEUU.

ta en todas las agencias gubernamentales del estado”, alcanzar las cero emisiones netas para 2050, llevar a cabo la transición a la energía renovable y aumentar los programas de capacitación para reestructurar a los trabajadores con las habilidades que necesitarán para trabajar en una economía verde.

“Para transformar la región de los Apalaches en una economía sostenible del siglo XXI – una que sea buena para los trabajadores, las comunidades y nuestra salud– se necesitarán considerables recursos federales. No podemos ni debemos conformarnos con menos, debido a los ingentes recursos que se han extraído de los Apalaches durante los últimos siglos.

Pero, ¿cómo se ajustarán las políticas del gobierno con estas iniciativas promovidas por los sindicatos? La campaña electoral de Biden se basó en reconstruir el sector estadounidense de la producción y, por tanto, a la clase media, mediante buenos empleos sindicalizados, lo cual abriría la vía para que Estados Unidos alcance las cero emisiones netas para 2050. Su plan llamado “Reconstruir Mejor” incluye un proyecto de energías limpias, una inversión de 2 billones de dólares estadounidenses en infraestructuras, la creación de 10 millones de empleos con buenos salarios, prestaciones y protecciones laborales, inversiones en investigación y desarrollo, la modernización de las escuelas y vivienda social.

Sin embargo, aunque el Partido Demócrata domina los tres poderes del Estado, las leyes federales sobre el clima, el trabajo y la infraestructura se han paralizado debido, en parte, a dos senadores demócratas de derechas: Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia Occidental. Este último estado cuenta con la segunda mayor tasa de pobreza de todo el país, debido principalmente a la notable pérdida de puestos de trabajo en la industria minera del carbón, en la que el senador Manchin amasó su fortuna. Como el Partido Republicano se opone al plan de Biden, estos dos votos dentro del Partido Demócrata determinarán si se aprueban o no las leyes.

En agosto, Manchin emitió el voto que inclinó la balanza hacia el rechazo a un proyecto de ley de reconciliación que hubiera significado la inversión de 3,5 billones de dólares estadounidenses en el país a lo largo de diez años (menos de la mitad de lo que gastará Estados Unidos en su presupuesto militar durante el mismo periodo de tiempo). Tal y como se propuso en un principio, dicha ley hubiera sido la mayor inversión relacionada con el clima de la historia del país, pero debido a varios compromisos que se negociaron dentro del Partido Demócrata, se terminaron eliminando muchos de los elementos iniciales. Según una reciente investigación de la organización *The Intercept*, Manchin ganó 4,5 millones de dólares gracias a sus empresas mineras de carbón, a pesar de que alegó que se encuentran en un fideicomiso desde que asumió su cargo.

Markell de la AFL-CIO, que formó parte del equipo de transición de Biden y Harris en el Departamento de Energía, es optimista sobre el compromiso de la administración de Biden con la transición justa: “Tenemos un presidente que se ha comprometido con los sindicatos y los empleos sindicalizados y entiende lo que eso significa para las familias y las comunidades. Al mismo tiempo, nos está encauzando para que podamos cumplir los objetivos del clima que los científicos aseguran que debemos cumplir”. Sin embargo, cuando le preguntamos si se aplicarán sus medidas legislativas, Markell concluye con prudencia: “Veremos si el Congreso quiere asumir su parte”.

**Agradecimientos:** La realización de este reportaje especial ha sido posible gracias a los fondos de la Friedrich-Ebert-Stiftung y el apoyo editorial de Bert De Wel, responsable de Política Climática de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

**Reportaje especial de *Equal Times*, número 13**

Autores: Maina Waruru, Fabrice Le Lous, Estrella Torres, Sitara Morgenster, Louis Seiller, Indigo Olivier

Material gráfico: Fabrice Le Lous, Nonie Reyes, E tū, Hanna Andrewes, Venture Taranaki, Louis Seiller, AFP, Alamy, NREL

Editores: Tamara Gausi (inglés), Marta Checa (español), Mathilde Dorcadie (francés)

Traductores: Louise Durkin y Brandon Johnson (al inglés); Eva López, Raquel Mora e Iñigo Rodríguez-Villa (al español); Nathalie Vernay, Charles Katsidonis y Salman Yunus (al francés)

Diseño: xcel7 – Maquetación: Vicente Cepedal

**EQUAL TIMES**

<http://www.equaltimes.org> | [info@equaltimes.org](mailto:info@equaltimes.org)

Teléfono: +32 (0)2 224 0233 | Fax: +32 (0)2 201 5815

Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1 – 1210 Bruselas – BÉLGICA